



**Universidad**  
Zaragoza

## Trabajo Fin de Grado

La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico  
Español. Análisis jurisprudencial del Tribunal  
Supremo.

Autor

Alberto Miguel Guillén Morán

Director

Manuel Guedea Martín

Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza  
2020

## Índice

I. Abreviaturas. ....	1
II. Introducción. ....	2
III. La expropiación forzosa: fundamento constitucional y legal. ....	3
IV. La expropiación forzosa en la Ley del Sector Eléctrico. ....	5
V. Los sujetos intervinientes en la expropiación forzosa. ....	7
1. La Administración expropiante. ....	7
2. El sujeto expropiado. ....	7
3. El beneficiario en las expropiaciones eléctricas. ....	8
VI. El objeto expropiado: la servidumbre de paso eléctrica. ....	10
1. Naturaleza, clases y contenido. ....	10
2. Las limitaciones y prohibiciones. ....	12
2.1 Limitaciones de contenido. ....	12
2.2 Limitaciones de tiempo. ....	14
2.3 Limitaciones territoriales. ....	14
2.4 Limitaciones técnicas. ....	15
2.5 El derecho de reversión. ....	15
3. La causas de extinción. ....	16
VII. El procedimiento expropiatorio. ....	17
1. Tipos de expropiación. ....	17
2. Contenido del procedimiento. ....	19
3. Otros trámites del procedimiento expropiatorio. ....	23
VIII. Las normas de valoración del justiprecio en las expropiaciones eléctricas. ....	25
IX. Conclusiones. ....	31
X. Bibliografía. ....	34

## I. Abreviaturas.

<b>CE</b>	Constitución Española.
<b>CC</b>	Código Civil.
<b>CCAA</b>	Comunidad Autónoma.
<b>LEF</b>	Ley de 17 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
<b>LOSEN</b>	Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, de 30 de diciembre de 1994.
<b>LSE</b>	Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
<b>REF</b>	Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
<b>RD 1955/2000</b>	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
<b>STC</b>	Sentencia del Tribunal Constitucional.
<b>STS</b>	Sentencia del Tribunal Supremo.
<b>TC</b>	Tribunal Constitucional.
<b>TRLSRU</b>	Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

## II. Introducción.

En el presente Trabajo de Fin de Grado se analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la expropiación forzosa en el sector eléctrico.

Dentro de este tema, la mayor parte de las sentencias se centran en el objeto expropiatorio y en las normas de valoración objetiva de los bienes expropiados, que son las que ofrecen mayores repercusiones sociales y económicas. Por lo tanto, estos puntos serán el objeto de especial atención del trabajo.

Este análisis jurisprudencial busca, a través de su exposición en el trabajo, evidenciar que existe una problemática latente en las partes nucleares del mismo, como son la expropiación de la servidumbre de paso eléctrica y sus normas de valoración.

La metodología que he seguido es analizar las sentencias del Tribunal Supremo y a su vez hacer referencias a las leyes relevantes a cada parte de proceso expropiatorio, así como a sus dimensiones extrayendo las cuestiones claves. Todo ello destacando las citas más relevantes que permiten delimitar y comprender con detalle la situación del alto tribunal

También, he analizado las cuestiones jurisprudenciales más relevantes para el Tribunal Supremo sobre la expropiación en el sector eléctrico español.

La razón por el cual elijo este tema es el interés que me suscita la expropiación forzosa en general pero a su vez de manera particular sobre el sector eléctrico debido a las numerosas cuestiones que me he planteado a lo largo de la carrera sobre este tema y la realización de este Trabajo de Fin de Grado me permite resolver y profundizar en los aspectos más importantes que se dan en este asunto.

### III. La expropiación forzosa: fundamento constitucional y legal.

El marco normativo de la Expropiación Forzosa está sustentado por dos pilares recogidos en la Constitución Española de 1978, concretamente en el artículo 33, en lo relativo a su base constitucional, y en su artículo 149.1.18ª, en lo relativo a su título competencial.

En cuanto a su base legal, se encuentra regulada en el artículo 33 de la CE en el que se determina que:

1. *Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.*
2. *La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.*
3. *Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.*

Este precepto constitucional reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia, proclama su función social y, garantiza que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Esta es la problemática que resuelve el Tribunal Supremo a través de su jurisprudencia y que en el presente trabajo se analizará.

La primera reflexión que merece este artículo es su ubicación en el texto constitucional. Si bien la propiedad privada y la herencia se incluyen en el Capítulo Segundo del Título Primero, referente a los derechos y libertades, no se integra en los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª, sino que se sitúa entre los "derechos y deberes de los ciudadanos" de la Sección 2ª. Ello implica que aunque dentro de esta sección segunda tienen una función constitucional relevante no poseen la protección que tienen los derechos de la sección primera, los cuales gozan de la posibilidad de interposición del recurso de amparo constitucional.

En efecto, de entre todas las restricciones de la propiedad y otros derechos patrimoniales legítimos, la expropiación forzosa a la que se refiere el apartado tercero de este artículo 33 de la Constitución es la más enérgica y radical, debiendo, en todo caso, ser objeto de indemnización por la Administración expropiante.

Así es reconocido reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en la **Sentencia de 18 de febrero de 1991** y en la **Sentencia de 10 de febrero de 2000**<sup>1</sup>.

En cuanto al título competencial por el cual se rige la expropiación forzosa hay que mencionar el artículo 149,1.18ª de la CE por el cual *“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias (...):*

*18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.*

Con este precepto queda claro que la competencia corresponde al Estado, con carácter exclusivo, aunque como veremos, una CCAA (Cataluña) tiene recogidas competencias en su Estatuto de Autonomía, que pueden confluir con estas. Esto permite entender el carácter subsidiario que jugará en ocasiones la LEF en el proceso expropiatorio referido al sector eléctrico.

En el caso concreto de Aragón, su Estatuto de Autonomía, en su artículo 77.16ª, se atribuye una competencia ejecutiva de expropiación forzosa, con el matiz de su remisión a la legislación estatal en cuanto al establecimiento de criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y función que tengan que cumplir. Ello muestra que este Estatuto de Autonomía reconoce la competencia estatal y, por lo tanto, no supone una intromisión en las propias competencias que atribuye la CE, como norma fundamental en materia expropiatoria.

---

<sup>1</sup><https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=33&tipo=2>

#### IV. La expropiación forzosa en la Ley del Sector Eléctrico.

La expropiación forzosa en el sector eléctrico está integrada dentro de la expropiación, pero con la característica de que rige un sector concreto en el que el Estado tiene competencia exclusiva en cuanto a la legislación básica. Por este motivo su regulación se rige por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Esta competencia ha sido analizada por el TC, el cual en su **Sentencia 32/2016, de 18 de febrero de 2016**, busca *“la delimitación del marco constitucional y estatutario de distribución de competencias en materia de energía eléctrica así como la doctrina constitucional al respecto señalando que, en el caso del Estado, confluyen dos títulos competenciales específicos (...)”*. En esta sentencia se dirime el título competencial recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual recoge como una competencia propia las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica incidiendo en la energía eléctrica, y el título competencial anteriormente mencionado en la Constitución.

De esta manera, la sentencia resuelve esta problemática competencial dotándola de una concurrencia competencial de doble sentido, material y formal. A su vez, el Estado tendrá dicha competencia aun cuando el aprovechamiento afecte a otra Comunidad Autónoma, con competencias en la materia, o cuando el transporte de la energía salga de su respectivo ámbito territorial. Además, la Comunidad Autónoma debe emitir un informe previo cuando la energía sea objeto de aprovechamiento fuera de la misma. Con estas dos vías se resuelve el conflicto y, además, dada la unificación de la regulación establecida en la Ley del Sector Eléctrico, lo que se consigue dotar de homogeneidad a este sector.

En Aragón, el Estatuto de Autonomía en su artículo 77.4<sup>a</sup>, establece una competencia compartida en materia de energía recogiendo la misma atribución reflejada en la anterior sentencia.

Cabe destacar que en este sector existió la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que actualmente se encuentra derogada por la LSE. Además, esta ley cuenta con el RD 1955/2000 que la desarrolla y la LEF y el Código Civil que son de aplicación supletoria.

Como se indicará en apartados posteriores, esta aplicación supletoria se encuentra regulada debido a que la imposición de servidumbres no se regula sistemáticamente en la LEF, por lo que en algunas ocasiones la jurisprudencia ha

acudido a la regulación de las servidumbres legales contenida en el Código Civil. Esto tiene su reflejo jurisprudencial en la **STS 2311/2017, de 6 de Mayo**.



## V. Los sujetos intervinientes en la expropiación forzosa.

En toda expropiación, ya sea referente al sector eléctrico o a otro sector, existen tres sujetos intervinientes en el proceso de expropiación que son la Administración expropiante, el expropiado y el beneficiario. Sin embargo, en determinadas situaciones, es posible que dos sujetos intervinientes sean el mismo, es decir, un mismo sujeto puede ser a la vez la Administración expropiante y el beneficiario, que es este caso será el beneficiario de la expropiación eléctrica.

### 1. La Administración expropiante.

Como se ha determinado anteriormente por el TC en cuanto a la competencia, la administración expropiante es el Administración General del Estado o, en su caso, la Administración de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la, según el artículo 55.3 de la LSE, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (o equivalente en la actualidad), sin perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros.

Esto se puede ver, entre otras, en la *Orden IET/2196/2015, de 18 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015, por el que se declara, en concreto, de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, SUA, el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea de 220kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Montebello de la línea Jijona-Cantalar, entre los apoyos 19 y 36, en los términos municipales de Busot y Aigües, en la provincia de Alicante.*

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón serán sus equivalentes como así se puede observar en la *Orden ICD/2/2020, de 2 de enero, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación parque eólico “Virgen Rodanas I” de 49,5 MW ubicada en Fuendejalón y Pozuelo de Aragón, promovido por la mercantil “Desarrollos Eólicos del Sur de Europa, S.L.”.*

### 2. El sujeto expropiado.

La LSE no contiene reglas generales relativas a las personas que se consideran expropiadas. En consecuencia, según su artículo 60, será de aplicación supletoria la LEF de 1954. Precisamente, en el artículo 3.1 de la LEF de 1954 se dice que “*las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el*

*propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación*”<sup>2</sup>. Por ello, la Administración Pública determinará la titularidad por el Registro de la Propiedad, en su defecto por el Catastro y por el conocimiento público y notorio.

No obstante, existen dos supuestos especiales en los cuales, en el primer de ellos hace referencia al subrogado de la transmisión de los bienes, el cual será el nuevo titular de las obligaciones y derechos del anterior, regulado en el artículo 7 de la LEF, y el segundo de ellos hace referencia a bienes litigiosos, bienes de menores o incapacitados o bienes cuyo titular no comparezca según el artículo 5 de la LEF, se producirá la intervención del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, los titulares de derechos reales e intereses económicos directos del bien expropiado sobre la cosa expropiada, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos, serán parte en el expediente, según el artículo 4.1 de la LEF.

También, si la cosa expropiada se adquiere libre de cargas, salvo que la Administración acuerde expresamente el mantenimiento del gravamen según el artículo 8 de la LEF, y si las cargas y derechos anteriores a la expropiación se convierten en derechos sobre el justiprecio, cuya distribución es una cuestión civil. Finalmente, por excepción, los arrendatarios rústicos y urbanos sí percibirán una indemnización independiente y se les abrirá expediente propio según el artículo 4.1 de la LEF y el artículo 6.2 del REF.

### 3. El beneficiario en las expropiaciones eléctricas.

La expropiación se realiza en favor del beneficiario. Por otra parte, también resulta posible que se efectué para la adquisición de bienes o derecho por terceras personas, surgiendo así la figura del beneficiario que no es el Estado. En este sentido en el artículo 2.2 de la LEF se dice que “pueden ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición”. Estas entidades y concesionarios son normalmente empresas públicas o semipúblicas o empresas concesionarias de la Administración encargadas por esta para la gestión y mantenimiento de las líneas eléctricas.

En el artículo 54 de la LSE se dice que “*se declaran de utilidad pública las*

---

<sup>2</sup> COLOM PIAZUELO, E., *La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico*, CEDECS, Zaragoza, 1998, pág. 88.

*instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso*". En consecuencia, serán los titulares de estas instalaciones quienes puedan solicitar la expropiación. Afirmación que también tiene su fundamento en el artículo 55.1 de la LSE, al indicarse en el mismo que *"para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite"*<sup>3</sup>. De ello se desprende que el beneficiario es la empresa que solicita la declaración de utilidad pública.

La aparición de la existencia del beneficiario distinto de la Administración, exige diferenciar claramente las funciones atribuidas a la Administración expropiante y a esa tercera persona en favor de la cual se realiza la privación de bienes y derechos. De esta forma, en el artículo 4 del REF se dice que cuando el sujeto sea el expropiante y el beneficiario al mismo tiempo, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones del mismo.

Por contra, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, corresponde al beneficiario solicitar a la Administración expropiante iniciar el expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberá justificar plenamente su procedencia legal de la misma y su propia cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles las justificaciones pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias<sup>4</sup>.

En conclusión y desde una perspectiva jurisprudencial la **STS 2722/2016, de 21 de Diciembre** clarifica la existencia de los tres sujetos que intervinientes en una expropiación forzosa; concretamente en su fundamento primero, se determina que *"El demandante, D. Diego, impugna el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A.U. el proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 El acuerdo se publica por Orden IET/1829/2013, de 2 de octubre, en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre de 2013"*.

---

<sup>3</sup> COLOM PIAZUELO, E., *La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico*, CEDECS, Zaragoza, 1998, pág. 90.

<sup>4</sup> COLOM PIAZUELO, E., *La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico*, CEDECS, Zaragoza, 1998, pág. 96.

## VI. El objeto expropiado: la servidumbre de paso eléctrica.

### 1. Naturaleza, clases y contenido.

El contenido de la servidumbre de paso eléctrica viene determinado, en primera instancia, por su configuración normativa; por lo que primero hay que establecer su **naturaleza**.

El artículo 57.1 de la LSE la define como *“una servidumbre que tendrá la consideración de servidumbre legal y que gravará los bienes ajenos”*. Por ello, la servidumbre de paso de electricidad o de energía eléctrica tiene naturaleza de servidumbre legal, que impone una obligación al predio o finca sirviente con obligación de pasar por el vuelo o subsuelo de la finca los cables necesarios para dar electricidad a una finca llamada dominante. En la misma línea se encuentra el artículo 157 del RD 1955/2000, que delimita el alcance de dicha servidumbre.

No obstante, Gómez Calero<sup>5</sup> define con mayor precisión la servidumbre de paso eléctrica como *«un derecho constitutivo en beneficio de una empresa y susceptible de ser establecido administrativamente al amparo de la Ley y por motivos de utilidad pública que faculta a su titular para conducir energía eléctrica a través de bienes ajenos, con instalación aérea o subterránea y para la explotación y conservación de las líneas mediante la correspondiente indemnización»*.

Además, el artículo 536 del CC determina que nos encontramos ante una servidumbre legal al establecerse por la ley, y el artículo 549 del CC va más allá y plantea discrepancias respecto de si la servidumbre tiene por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares.

Esto tiene reflejo en la **STS 2311/2017, de 6 de junio** que dice que *“La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 536 del Código Civil, una servidumbre legal, cuyo alcance y contenido no es otro que el previsto en el Título IX de la LSE, siendo de aplicación subsidiaria en lo no previsto por esta, las disposiciones específicas del Código Civil”*.

No obstante, hay que destacar que el CC actúa de manera supletoria como así lo afirma el artículo 60 de la LSE, y por lo tanto hay que atender a la propia legislación eléctrica para concretarla.

---

<sup>5</sup> GÓMEZ CALERO, JUAN, “La servidumbre de paso de energía eléctrica”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Reus S.A., 1967, pág. 838 y sigs.

El objeto expropiado en la expropiación forzosa es la servidumbre de paso eléctrica, como así muestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la **STS 530/2013 de 12 de febrero** y la **STS 1085/2017 de 21 de marzo**, entre otras. Esto muestra que toda expropiación eléctrica necesita de este tipo de servidumbre completa de paso, cuyos elementos permitan al expropiante hacerse con la misma dado que esta expropiación se da mayoritariamente en fincas privadas. En el caso de las fincas públicas se sobreentiende que no van a existir limitaciones o conflictos entre las Administraciones Públicas.

Hay dos **clases** de servidumbre de paso eléctrica, como son la servidumbre de paso aéreo, regulada en el artículo 57.2 de la LSE, que y la servidumbre de paso subterráneo, regulada en el artículo 57.3 de la LSE.

De esta forma, la servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía; todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Esto se concreta pormenorizadamente en el artículo 157 del RD 1955/2000. No obstante, existen unos límites propios a esta servidumbre de paso aéreo recogidos en la **STS 472/2017, de 21 de marzo** en la que se dice que *“[...] para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección”. Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias”*.

Por otra parte, la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Esto se concreta pormenorizadamente en el artículo 158 del RD 1955/2000, en el cual se dice describe de qué se comprenderá que la servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica. No obstante, existen unos límites propios a esta servidumbre de paso subterránea recogidos en la **STS 472/2017, de 21 de marzo** en la que se dice que *“Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el párrafo*

*anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias".*

El **contenido** de la servidumbre de paso eléctrica viene determinada por el artículo 57.4 de LSE en la que dicha servidumbre comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.

Así lo recoge la jurisprudencia en la **STS 2311/2017, de 6 de junio** en la que se dice que *“una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para atender a la vigilancia, conservación y reparación de la misma”*. Además, *“En cuanto al derecho de paso de conducción, ni es ilimitado ni permanente, únicamente se prevé para vigilar, conservar o reparar la línea de transporte, lo cual ahonda en la corrección del criterio relativo a la valoración en el 50% del valor del terreno”*. Finalmente, *“La afección que graba las fincas, como consecuencia de la expropiación que nos ocupa, se trata de una servidumbre sobre el vuelo de las fincas y el derecho de paso a la conducción, configurado como una adminicula iuris de la servidumbre, no siendo un paso ilimitado o permanente, sino un paso esporádico y determinado materialmente por tres fines: vigilancia, conservación y reparación”*.

## 2. Las limitaciones y prohibiciones.

Las limitaciones para la imposición de dicha servidumbre se pueden clasificar en limitaciones de contenido; limitaciones de tiempo o de momento temporal; limitaciones territoriales; limitaciones técnicas y limitaciones referidas al derecho de reversión.

### 2.1 Limitaciones de contenido.

Las **limitaciones de contenido** vienen establecidas en el artículo 58 de la LSE en el que se dice que *“no podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea. Además, no podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o*

*patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada”.*

En relación a estas limitaciones de la servidumbre de paso se abordan en la **STS 1367/2016, de 1 de abril**. Concretamente, se hace referencia a la posibilidad de discutir el trazado de una línea eléctrica con motivo de la aprobación de su utilidad pública y la necesidad de ocupación y a la existencia de trazados alternativos más ventajosos al propuesto por la empresa titular de la red que se proyecta construir.

*Así, se dice que “el distinto alcance y contenido que tienen la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, [...] constituyendo la primera una actuación previa a la expropiación, que se limita a valorar la utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el objeto expropiado, cuya identificación sólo tiene ese alcance de utilidad para el fin perseguido, siendo el acuerdo de necesidad de ocupación el que concreta y precisa los bienes que se afectan al fin de la expropiación, que han de ser los estrictamente indispensables para tal fin, que ha de lograrse con el mínimo de sacrificio posible para la propiedad, o, “el bien elegido para la expropiación ha de ser siempre el que responda a la traducción más exacta y fiel de la finalidad perseguida, que en el supuesto de concurrencia de varias posibles soluciones de similar entidad expropiable, ha de dirimirse la elección por la que represente el menor sacrificio del derecho de propiedad privada”.*

Aquí, se acuerda limitar la utilidad pública de la servidumbre al objeto expropiado y sus bienes acordados en la necesidad de ocupación, no pudiendo ser extendido a otros bienes que no se encuentren en la misma.

*También, “El distinto alcance e incidencia inmediata en las titularidades dominicales afectadas por la expropiación, que tienen la declaración de utilidad pública o interés social y el acuerdo de necesidad de ocupación, se refleja en el procedimiento establecido para su adopción y, concretamente, en lo que atañe a la intervención de los interesados, que se contempla específicamente en relación con la necesidad de ocupación y no así respecto de la declaración de utilidad pública. Finalmente, dentro de este planteamiento general, conviene señalar que el control de legalidad de cada acto del procedimiento expropiatorio ha de efectuarse desde el contenido y alcance que le es propio, no pudiéndose trasladar las exigencias propias de un concreto acuerdo, como el de necesidad de ocupación, a otro de distinto alcance, como es la declaración de utilidad pública o interés social”.*

Por consiguiente, el acuerdo de necesidad de ocupación tiene por objeto la concreción de los bienes que se afectan al fin de la expropiación, que han de ser los estrictamente indispensables para tal fin y que ha de lograrse con el mínimo de sacrificio posible para la propiedad.

La sentencia deja claro que existe un límite de contenido y que no puede ampliarse la necesidad de ocupación a la declaración de utilidad pública al ser esta anterior y más general podría servir de cajón de sastre para ampliar de manera casi ilimitada la expropiación incurriendo en su desnaturalización.

## 2.2 Limitaciones de tiempo.

En la anterior sentencia se puede encontrar la **limitación de tiempo o de momento procesal**, así *“La consecuencia a los efectos de su impugnación jurisdiccional es evidente, pues solo cuando la aprobación del proyecto del trazado contemple una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por la expropiación es posible entender que se produce la necesidad de ocupación de tales bienes a los efectos de la iniciación del procedimiento expropiatorio, y es en ese momento en el que los afectados podrán impugnar el trazado propuesto y proponer otras alternativas menos gravosas y consecuentemente impugnar el trazado elegido sin que pueda oponérsele, como hace la sentencia de instancia, que dicho trazado ya fue establecido y quedó firme con motivo de la aprobación del proyecto de ejecución de la obra tramitado al margen de los afectados por el proyecto”*. Es decir, en aquellos casos en que la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, se produzcan **con posterioridad** a la aprobación del proyecto de instalación eléctrica, puede cuestionarse el trazado o la ubicación de la instalación eléctrica mediante la impugnación del acuerdo de necesidad de ocupación. Es evidente que el TS impone una limitación temporal.

## 2.3 Limitaciones territoriales.

En tercer lugar, el artículo 58 de la LSE y el artículo 161 del RD 1955/2000 amplían las limitaciones a esta servidumbre, dando lugar a las **limitaciones territoriales**, de tal manera que tampoco se puede imponer la servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier tipo de propiedades particulares siempre que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.



#### 2.4 Limitaciones técnicas.

Además, como **limitaciones técnicas**, el artículo 161 del RD 1955/2000 recoge que tampoco se puede imponer la servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier tipo de propiedades particulares siempre que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 por 100 de la parte de línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma; y que técnicamente la variación sea posible.

#### 2.5 El derecho de reversión.

Finalmente, se encuentra la limitación del **derecho de reversión**, este se configura partiendo de la cláusula supletoria de la legislación expropiatoria contenida en el artículo 60 de la LSE. Esto lleva a que se acuda al derecho de reversión, el cual a su vez es una causa de extinción de la expropiación en sí, por lo que constituye una forma de extinción de la servidumbre de paso eléctrica originada por esta legislación expropiatoria.

Este derecho de reversión se encuentra regulado en los artículos 54 y 55 de la LEF y se desarrolla en los artículos 63 y ss. del REF.

Así, la **STS 795/2017, de 3 de marzo** determina que *“el derecho de reversión en una expropiación general y sectorial como puede ser en una expropiación en el sector eléctrico es una consecuencia de la ineficacia o invalidez sobrevenida, con efectos "ex nunc", sin carácter retroactivo de la expropiación originaria por la desaparición de la causa que la motivó, bien <por no establecerse el servicio o ejecutarse a obra que motivó la expropiación, así como también, si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afectación >. Tres son las causas legales de reversión establecidas en el referido art. 54.1 LEF: a) que no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación; b) que, realizada la obra o establecido el servicio, hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados; c) que desaparezca la afectación al fin para el que fueron expropiados los bienes (...). El principal y normal efecto de la reversión (cuando concurren alguna de sus causas) es la devolución "in natura" del bien expropiado, previa <<...restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el periodo comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión... Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras*

*aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo III del Título II de esta Ley”.*

Aportando las causas del derecho de reversión, esta sentencia analiza los efectos producidos por la misma que consisten en la devolución del objeto expropiado, en este caso sería el terreno en el cual se iba a llevar a cabo la instalación eléctrica.

Además, en dicha sentencia del Tribunal Supremo se dice que *“Cuando no sea posible la devolución del bien (imposibilidad material o ineffectividad legal porque los bienes hayan sufrido una alteración indebida), procederá una indemnización, cuyo importe se determinará en la forma establecida en el art. 66.2 del Reglamento de la LEF. La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo.....>> (art. 55 LEF)”*. Esta devolución del objeto expropiado conllevará por parte del expropiado la devolución del justiprecio pactado con el expropiante.

### 3. La causas de extinción.

Por otra parte, la servidumbre de paso de energía eléctrica constituye un derecho real limitado que puede extinguirse, de forma que el fundo sirviente pueda de nuevo configurarse como una propiedad plena. Las causas de extinción no aparecen reguladas en la LSE sino en el RD 1955/2000, y más concretamente en su artículo 155.

Así pues, en cuanto a las causas de extinción de la servidumbre de paso eléctrica recogidas en el RD 1955/2000, hace que estas se extingan por la retirada de la instalación exceptuando la adición, cambio o reparación de sus elementos; por la falta de uso de la misma sin causa justificada durante un plazo de nueve años desde que se haya interrumpido el servicio; por revocación o extinción de la autorización sobre dicha instalación; por las demás causas previstas en el Código Civil.

## VII. El procedimiento expropiatorio.

El eje principal del procedimiento expropiatorio es la declaración de utilidad pública del bien privado sobre el que va a recaer la expropiación y, por consiguiente, la declaración de necesidad de ocupación de estos bienes. Así, en el sector eléctrico nos vamos a encontrar con una regulación contenida en la LSE desarrollado por el RD 1955/2000, y como derecho supletorio por la LEF. No obstante, debemos recordar el citado artículo 33.3 de la CE.

El procedimiento expropiatorio se puede llevar a cabo de conformidad o de forma forzosa. Esta distinción se da en función de si el expropiado lleva a cabo voluntariamente la expropiación de sus bienes con el expropiado en favor del beneficiario, por el cual nos encontramos ante un procedimiento expropiatorio voluntario, o, por el contrario el expropiado se opone a la expropiación por parte del expropiante, siguiendo un procedimiento expropiatorio forzoso; ambos regulados en las normas sectoriales.

### 1. Tipos de expropiación.

Dado el carácter de la expropiación, ésta solo puede dividirse en dos tipos, según sea la respuesta del sujeto expropiado, de conformidad la expropiación en sí (aunque más tarde discuta la cuantía) y en segundo lugar si no la acepta y debe realizarse el procedimiento forzoso.

La **conformidad** tiene su fundamento en el artículo 151 del RD 1955/2000, por el cual *“en cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Ello permite que en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación, adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión del expediente expropiatorio. Esta forma de expropiación permite a la empresa negociar con el titular del bien en el que dicha empresa quiere realizar la construcción de la instalación eléctrica”*.

Por otra parte, se encuentra la **expropiación forzosa** en la que dada la oposición del sujeto expropiado, se tiene que seguir un procedimiento expropiatorio forzoso y, por hecho total o necesidad de la expropiación.

Tras la obtención de la autorización administrativa por parte del sujeto expropiante, el procedimiento expropiatorio se inicia con la declaración de utilidad pública, la cual es determinada por la jurisprudencia como la principal causa expropiandi. De esta forma lo confirma la **STS 2124/2009, de 21 de abril** por la cual *“La utilidad pública en sentido estricto -es decir, la idoneidad de la obra o servicio para ser causa expropiandi - existe, precisamente por imperativo del art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico”*.

El artículo 54 de la LSE y el artículo 140 del RD 1955/2000 dice que *“Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas”*.

Hay que destacar que la declaración de utilidad pública ex lege, en referencia a las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica, el proyecto ha de incluir la relación de los bienes y derechos expropiados. En este sentido la **STS 2124/2009, de 21 de abril** dice que *“Es innegable, que exista una declaración de utilidad pública ex lege de las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica. Sentado lo anterior, la expropiación aquí examinada se llevó a cabo con base en los arts. 52 y siguientes de la Ley del Sector Eléctrico, en un único acto fueron acordadas la declaración de utilidad pública y la declaración de necesidad de ocupación, que además comporta la urgente ocupación. En este punto difiere del procedimiento expropiatorio ordinario, en que primero se hace una declaración de utilidad pública de la obra o servicio que justifica la expropiación y luego se identifican los concretos bienes o derechos cuya ocupación es necesaria para llevar a cabo la obra o el servicio de utilidad pública”*. Ello quiere decir que en el procedimiento expropiatorio forzoso la declaración de utilidad pública no se generaliza a la obra o servicio que justifica la expropiación, sino solamente a los bienes y derechos afectados, es decir, la utilidad pública y la necesidad de ocupación tienen que materializarse conjuntamente. Esto es así, dado que el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que *“Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las*

*instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación*". Por tanto, la declaración de utilidad pública, en suma, no puede hacerse sin referencia a bienes o derechos concretos.

Además, la mencionada sentencia determina que el conjunto de todas estas afirmaciones conlleva *"una declaración de utilidad pública ex lege de las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica: directamente de la ley sólo surge la declaración de utilidad pública de los proyectos relativos a instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica; pero, para que ello se concrete en bienes o derechos determinados y susceptibles de ser ocupados, es preciso que el proyecto incluya también la relación de los mismos"*.

## 2. Contenido del procedimiento.

Partiendo de la existencia de dos tipos de expropiación forzosa como son la conformidad, en la que no se plantea problemática alguna en cuanto a la aceptación de la expropiación, y la forzosa, en la cual el conflicto da lugar a una problemática originada por el cumplimiento estricto de las distintas fases del procedimiento; es ahí donde tanto la ley como el Alto Tribunal se pronuncian para resolver esta problemática.

El artículo 55 de la LSE y el artículo 143 del RD 1955/2000 dice que *"para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo el proyecto de ejecución de la instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación. La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los organismos afectados. Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, si la autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla en los demás casos"*. Por tanto, el procedimiento se inicia con la **solicitud de la declaración de utilidad pública** junto con el proyecto ejecutivo como así dice la **STS 753/2016, de 25 de febrero** en donde *"No cabe declarar la utilidad pública de una instalación eléctrica sin aprobar simultáneamente el proyecto ejecutivo o, pues no cabe*

*admitir abrir la vía expropiatoria y la ocupación urgente de bienes y derechos sin contar previamente con la relación concreta e individualizada definitiva de los bienes y derechos afectados, y dicha relación sólo se contiene en el proyecto ejecutivo, pues sólo en el se encuentra finalmente determinada la exacta y definitiva ubicación de la instalación”.*

Tras la solicitud de la declaración de utilidad pública, se continúa con una **información pública**. La LSE no menciona las características de esta etapa y por ello se recoge en el artículo 144 del RD 1955/2000, por el cual la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, junto con el documento técnico citado en el artículo anterior, se someterá al **trámite de información pública** durante el plazo de veinte días. A estos efectos, se insertará anuncio, con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de las provincias afectadas. El anuncio se publicará también en uno de los diarios de mayor circulación de cada una de las provincias afectadas. Asimismo, esta información se comunicará a los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes o derechos afectados por la instalación, para su exposición al público, por igual período de tiempo.

Tras someterse a información pública la declaración de utilidad pública, se produce un periodo de **alegaciones**. Así, el artículo 145 del RD 1955/2000 dice que si como consecuencia de la información practicada de acuerdo con el artículo anterior, se hubiesen presentado alegaciones, éstas se pondrán en conocimiento del solicitante para que éste a su vez comunique al órgano encargado de la tramitación lo que estime pertinente en el plazo no superior a quince días, quien, a su vez, junto con el resto del expediente tramitado, remitirá dichas alegaciones y las manifestaciones del peticionario a la Dirección General de Política Energética y Minas, así como, en el caso de necesaria expropiación, un informe basado en el proyecto presentado, relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 143 del presente Real Decreto.

Tras el periodo de alegaciones se produce un **periodo de información** a otras Administraciones públicas. El artículo 146 del RD 1955/2000 dice que por el órgano encargado de la tramitación del expediente, simultáneamente al trámite de información pública, se dará cuenta de la solicitud y de la parte del documento técnico por el que las distintas Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de servicios de interés general resulten afectados, a fin de que por éstas se emita el correspondiente

informe. Se entenderá que no existe objeción alguna cuando pasados veinte días y reiterada la petición transcurran diez días más sin recibir respuesta de dichas Administraciones u organismos públicos o empresas señaladas. Se entenderá realizado el trámite de informe a que se refiere el apartado anterior cuando, en el supuesto de haberse solicitado conjuntamente la declaración de utilidad.

Aquí, se puede hacer referencia a la **STS 3578/2016, de 14 de julio**, en la cual se determina en su fundamento de derecho tercero las Administraciones Públicas implicadas en esta fase del procedimiento. En ella, se aprecia las entidades estatales, autonómicas y locales, y las empresas privadas que bien, incoan el procedimiento, someten a información pública, presentan alegaciones, conceden las obras públicas solicitando previamente informes y finalmente resuelven; todo ello correspondiéndole a cada una sus funciones de acuerdo a la ley.

Tras informar a otras Administraciones públicas que pueden estar implicadas en la expropiación, se formula **oposición y objeción**. Así, el artículo 147 del RD 1955/2000 dice que si “[...] se hubiesen formulado objeciones por las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general consultadas, se pondrán aquéllas en conocimiento de la entidad solicitante, a fin de que en un plazo de quince días realice las rectificaciones correspondientes. Esta contestación será remitida por la Administración que tramita el expediente a las Administraciones u organismos públicos o empresas de servicio público o de servicios de interés general que los hubiesen formulado para que en un **plazo de quince días** presten su conformidad o reparos con la misma. Se entenderá su conformidad si dentro de este plazo las citadas Administraciones u organismos no emiten un nuevo escrito de reparos”.

Finalmente, tras formular oposición y objeción se procede a **resolver**. Así, el artículo 148 del RD 1955/2000 dice que “la resolución sobre la declaración de utilidad pública corresponderá a la Dirección General de Política Energética y Minas, si la autorización es de competencia estatal, salvo en el caso de que se mantuviesen expresamente las oposiciones u objeciones sobre la declaración de utilidad pública por parte de las Administraciones u organismos públicos consultados y el Ministerio de Economía discrepase de sus propuestas, en cuyo caso la resolución del expediente corresponderá al Consejo de Ministros. En todo caso, el órgano competente deberá dictar y notificar la correspondiente resolución en un **plazo de seis meses** desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de dicho órgano [...]”.

El expediente expropiatorio tiene que servir de cobertura legal para la actuación administrativa. De esta forma, la **STS de 9 de julio de 2012** dice que *“En el presente caso no nos encontramos ante el primer supuesto de una actuación administrativa de ocupación de la finca carente de acto de cobertura. El artículo 125 LEF limita la vía de hecho a los supuestos de incumplimiento de los requisitos sustanciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y previo pago o depósito, sin que en este caso se denuncie ninguna irregularidad en esos tres momentos. En el expediente administrativo consta la Resolución de aprobación del Proyecto de Ejecución de instalación eléctrica en el término municipal de Rojas (Alicante), y de declaración de su utilidad pública, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 LEF, así como la orden de consignación de los correspondientes importes en la Caja General de Depósitos”*.

Por otra parte, se ha mencionado que al proceso expropiatorio en el sector eléctrico se le aplica supletoriamente las normas expropiatorias de la LEF, según el artículo 60 de la LSE. Esto permite que esta aplicación supletoria complemente los aspectos sectoriales en materia de expropiación y así tener una perspectiva completa de la fundamentación jurídica de este procedimiento expropiatorio.

Por consiguiente, el artículo 9 y 10 de la LEF determinan el concepto genérico de utilidad pública. Esta declaración de utilidad pública conlleva la necesidad de ocupación de los bienes recogida en el artículo 15 de la LEF.

Sin embargo, en cuanto a la posible supletoriedad de la LEF en materia de declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación la **STS 753/2016, de 25 de febrero** dice que *“la regulación eléctrica determina que la propia declaración de utilidad pública lleva aparejada la necesidad de ocupación efectiva de los bienes afectados, de forma que desaparece la dualidad de fases prevista en la Ley de Expropiación Forzosa antes señalada. Así, frente a lo dispuesto en los artículos 9 y 15 de la Ley de Expropiación Forzosa el artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico establece que la declaración de utilidad pública [...]”*. Es decir, no se aplica subsidiariedad de la LEF al existir una ley sectorial propia que regula estos dos elementos procedimentales.



### 3. Otros trámites del procedimiento expropiatorio.

Visto el contenido del procedimiento, es relevante analizar la posterior ocupación del bien expropiado debido a que este se encuentra ligado con la declaración de utilidad pública.

En referencia a ello, la utilidad pública en las expropiaciones en el sector eléctrico tiene que conllevar, necesariamente, la posterior ocupación de los bienes. Además, dada su problemática, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre esta cuestión. Así, la **STS 2124/2009, de 21 de abril** dice que *“La utilidad pública en sentido estricto –es decir, la idoneidad de la obra o servicio para ser causa expropriandi- existe, precisamente por imperativo del art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico. Lo que no existe en el presente caso, a la vista de la valoración de la prueba efectuada por la sentencia impugnada, es la necesidad de ocupación de la finca de la expropiada; y ello porque se considera probado que existen alternativas posibles y menos gravosas. Habría sido preferible, en aras a la claridad, que la sentencia impugnada hubiese dicho que la anulación de la resolución se debía a falta de necesidad de ocupación. Ahora bien, ello no significa que haya habido una auténtica infracción del citado art. 52 de la Ley del Sector Eléctrico, ya que en este caso, como se ha visto, la declaración de utilidad pública y la declaración de la necesidad de ocupación iban necesariamente unidas en un único acto. Podría decirse, siguiendo la lógica del art. 53 de ese mismo texto legal, que hay “ausencia de utilidad pública” en cuanto ésta se refiere a la finca de la expropiada”. Ello, hace que la ausencia de utilidad pública sea motivo de que la utilidad pública solo hubiera afectado al bien expropiado y no a la totalidad del proyecto expropiatorio.*

El efecto que se desprende de la declaración de utilidad pública es la necesidad de ocupación, en este sentido el artículo 56.1 de la LSE y el artículo 149.1 del RD 1955/2000 afirma que *“la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa”.*

A pesar de lo dicho hasta aquí, es importante recalcar que el TS también distingue, tanto en contenido como en alcance, como puede verse en la **STS de 22 de septiembre de 2009** dice que *«el distinto contenido y alcance de la declaración de utilidad pública y la resolución acordando la necesidad de ocupación, constituyendo la primera una actuación previa a la expropiación, que se limita a valorar la utilidad*

*pública o interés social del fin al que haya de afectarse el objeto expropiado, cuya identificación sólo tiene ese alcance de utilidad para el fin perseguido, siendo el acuerdo de necesidad de ocupación el que concreta y precisa los bienes que se afectan al fin de la expropiación, que han de ser los estrictamente indispensables para tal fin, que ha de lograrse con el mínimo de sacrificio posible para la propiedad, o como dice la sentencia de 30 de diciembre de 1991 , "el bien elegido para la expropiación ha de ser siempre el que responda a la traducción más exacta y fiel de la finalidad perseguida, que en el supuesto de concurrencia de varias posibles soluciones de similar entidad expropiable, ha de dirimirse la elección por la que represente el menor sacrificio del derecho de propiedad privada».* Esto indica que aunque tanto la declaración de utilidad pública como la necesidad de ocupación producen sus efectos conjuntamente, cada una tiene unas características propias diferentes.

Así, según el artículo 150 del RD 1955/2000, *“una vez declarado el bien de utilidad pública es obligatorio su temprana ocupación por parte de la Administración para que esta inicie las actuaciones expropiatorias, conforme al procedimiento de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, siendo de aplicación el plazo de un mes para la notificación a los interesados afectados y a las publicaciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, procediéndose a la expropiación forzosa del pleno dominio de los terrenos y derechos necesarios para la construcción de la misma y de sus servicios auxiliares o complementarios, en su caso, o a la constitución de la correspondiente servidumbre de paso”.*

En cuanto al carácter urgente de la ocupación de los bienes, el artículo 149.1 del RD 1955/2000 dice que *“La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación”.* Por ello, la **STS de 28 de Mayo de 2001, sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo** establece en su Fundamento de Derecho Segundo un ejemplo de procedimiento expropiatorio, en el cual se observa una urgente ocupación de los bienes afectados.

### VIII. Las normas de valoración del justiprecio en las expropiaciones eléctricas.

Una cuestión fundamental en los procedimientos expropiatorios es la determinación del valor del bien expropiado.

El artículo 33.3 de la CE recoge la figura del justiprecio como indemnización a la expropiación del bien. Este precepto constitucional obliga a que se desarrolle por otras leyes la correspondiente indemnización.

Aunque debe ser la LSE quien regule el proceso indemnizatorio, en ella no se recoge ninguna alusión a dicho proceso. Por ello, se recoge en el RD 1955/2000. En esta línea sigue la **STS 1000/2017, de 6 de junio** que dice *“En las expropiaciones eléctricas no podemos obviar que existe una normativa propia, especial, de obligada observancia a la hora de utilizar los conceptos indemnizar. Concretamente, como ya hemos visto lo recogido en la LSE y en el RD 1955/00, conformando un único derecho real de naturaleza limitada y de contenido legal”*.

El artículo 156 del RD 1955/2000 recoge la determinación del justo precio y pago. Esto hace que para su determinación se remita a la LEF aunque teniendo en cuenta unos conceptos indemnizatorios propios del sector eléctrico. Con ello, se puede llegar a extraer tres afirmaciones.

La primera es la encontrada en su párrafo primero, en el cual se dice que se aplicará la regulación contenida en la Ley de Expropiación Forzosa cuando se ocupe el bien y se proceda al justiprecio y pago del mismo. De esto se concluye que para iniciar el procedimiento indemnizatorio, antes tiene que haberse establecido la ocupación del bien.

La segunda es la encontrada en el segundo párrafo, en el que se recoge que será en el capítulo III del Título II de la LEF en el que regule la indemnización tanto del valor de los bienes como la de los derechos expropiados.

La tercera es la encontrada en el tercer párrafo, permite distinguir tres conceptos de indemnización como consecuencia de la imposición de una servidumbre de paso eléctrica. de , se puede encontrar el valor de la superficie del terreno ocupado, el importe del demérito y la indemnización por daños y perjuicios.

El **terreno** en cuyo valor hace referencia, según el artículo 156.3.a) del RD 1955/2000, es el ocupado por los postes, apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovechamiento normal del suelo.

Ello puede verse con especial claridad en la anterior **STS 1000/2017, de 6 junio** de la cual se extrae que *“Siendo ello así, y por lo que respecta a la valoración de las servidumbres, cabe decir, teniendo en consideración las disposiciones legales citadas: 1) En cuanto a la valoración de la servidumbre, no se trata, en primer lugar, y es un dato muy relevante, de una servidumbre de paso terrestre, ni subterránea que comprenda la ocupación del suelo o subsuelo por los cables conductores de energía, sino una servidumbre de paso aérea, es decir, sobre el vuelo.*

*Esta servidumbre, que tiene carácter de servidumbre legal (art. 56 LSE), se indemniza según ya hemos señalado en base a los conceptos establecidos en el artículo 156 del RD 1955/00. Igualmente, y para su valoración, debe tenerse presente el uso del vuelo que la finca tenga en el momento de la expropiación (art. 36.1 LEF). Siendo ello así, la pretensión manifestada en su recurso por el actor, relativa a una valoración del 75% por la limitación del vuelo carece de toda justificación”.*

Por otra parte, ese terreno ocupado puede contener un derecho de paso sobre, es decir, una limitación, y en tal caso la citada **STS 1000/2017, de 6 de junio** recoge que *“En cuanto al derecho de paso de conducción, ni es ilimitado ni permanente, únicamente se prevé para vigilar, conservar o reparar la línea de transporte, lo cual ahonda en la corrección del criterio relativo a la valoración en el 50% del valor del terreno. Finalmente esta parte ataca que se pide por la actora la concesión del premio de afección sobre el valor de la servidumbre de paso aérea de energía eléctrica ya que por la naturaleza de la expropiación los propietarios conservan el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados”.*

Así, el valor que el tribunal otorga a los citados terrenos queda corregido cuando se trata de establecer un derecho de conducción o paso para tareas de vigilancia, reparación o conservación porque dichas limitaciones a la propiedad no son ilimitadas ni permanentes llegando a corregir su valoración en un 50 % del valor (una corrección considerable). El tribunal argumenta que por naturaleza de esta expropiación los propietarios conservan el uso y disfrute de los derechos expropiados, motivo por el cual sostiene dicha corrección de valor.

En la misma línea, la **STS 3096/2015, de 7 de julio** dice que *“[...] el importe de la indemnización por el establecimiento de una la servidumbre permanente aérea para el paso de una línea eléctrica, por entender excesivo que dicha limitación se cuantifique en el 80% del valor del suelo afectado por la misma. Por lo que respecta a este extremo, la jurisprudencia ha establecido diferentes porcentajes sobre el valor total del*

*suelo para cuantificar el perjuicio que supone la implantación de una servidumbre, tomando en consideración el tipo de uso que los terrenos tenían y las limitaciones que la servidumbre impone. En el supuesto que nos ocupa, nos encontramos ante suelo no urbanizable que se ve afectado por una servidumbre permanente de paso de energía eléctrica que no supone un desapoderamiento de la superficie afectada ni su imposibilidad de seguir explotándola conforme a su uso rústico, aunque este tipo de servidumbres limitan y condicionan su explotación y conllevan la obligación de soportar el paso para las labores de reparación y mantenimiento. Es por ello, que se estima adecuado cuantificar estas limitaciones en un 50% del valor del suelo afectado”.*

Aquí se afirma que la solicitud de suponga una indemnización del 80% es excesiva, pues la jurisprudencia del Alto Tribunal sigue su línea jurisprudencial de indemnizar con un 50% esa limitación impuesta al bien expropiado.

La **STS 2311/2017, de 6 de junio** dice que “*En cuanto a la valoración del vuelo (servidumbre de paso de energía eléctrica) explica que: < La afección que graba las fincas, como consecuencia de la expropiación que nos ocupa, se trata de una servidumbre sobre el vuelo de las fincas y el derecho de paso a la conducción, configurado como una adminicula iuris de la servidumbre, no siendo un paso ilimitado o permanente, sino un paso esporádico y determinado materialmente por tres fines: vigilancia, conservación y reparación. En las expropiaciones eléctricas no podemos obviar que existe una normativa propia, especial, de obligada observancia a la hora de utilizar los conceptos indemnizar. Concretamente, como ya hemos visto lo recogido en la LSE y en el RD 1955/00, conformando un único derecho real de naturaleza limitada y de contenido legal. Siendo ello así, y por lo que respecta a la valoración de las servidumbres, cabe decir, teniendo en consideración las disposiciones legales citadas: 1) Esta servidumbre, que tiene carácter de servidumbre legal (art. 56LSE), se indemniza según ya hemos señalado en base a los conceptos establecidos en el artículo 156 del RD 1955/00. Igualmente, y para su valoración, debe tenerse presente el uso del vuelo que la finca tenga en el momento de la expropiación (art. 36.1 LEF). Siendo ello así, la pretensión manifestada en su recurso por el actor, relativa a una valoración del 75% por la limitación del vuelo carece de toda justificación. 2) En cuanto al derecho de paso de conducción, ni es ilimitado ni permanente, únicamente se prevé para vigilar, conservar o reparar la línea de transporte, lo cual ahonda en la corrección del criterio relativo a la valoración en el 50% del valor del terreno. > Finalmente esta parte ataca*

*que se pide por la actora la concesión del premio de afección sobre el valor de la servidumbre de paso aérea de energía eléctrica ya que por la naturaleza de la expropiación los propietarios conservan el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados”.*

En esta sentencia se rechaza la valoración del 75% al tratarse de una limitación dirigida a funciones tasadas, y por ello se le asigna la valoración del 50% del valor.

El **importe del demérito**, según el artículo 156.3.b) del RD 1955/2000, en el que en el predio sirviente ocasionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovechamiento del precio como consecuencia del paso para la vigilancia, conservación y reparación de la línea y las restricciones exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

De esta manera, la **STS 25 febrero 1992** dice que *“la servidumbre de paso de energía eléctrica da lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley 10/1966, de 18 de marzo, a la correspondiente indemnización que se integra, al modo que hizo la entidad beneficiaria en su hoja de aprecio, por el valor de la superficie de terreno ocupada por los apoyos o torres, el importe del demérito que en el predio sirviente ocasiona la servidumbre, así como de las limitaciones en el uso y aprovechamiento de aquél, por la vigilancia, conservación y reparación y la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la ocupación temporal [...]”*<sup>6</sup>.

De la **STS de 1 de julio de 1986** se extrae que el porcentaje sobre el valor del terreno es variable, en función de la calificación urbanística y clase de cultivo, y más elevado cuando los terrenos son edificables o con plantaciones de arbolado. Además, la **STS de 23 de abril de 1991** afirma que este porcentaje no podrá ser del 100 %, ya que se trata de la imposición de una servidumbre y no la expropiación del pleno dominio<sup>7</sup>.

Por tanto, esta jurisprudencia concluye que el demérito sufrido, como consecuencia de las actuaciones en la servidumbre, se fija dependiendo del tipo de suelo sobre el que se lleva a cabo.

En este sentido, en este caso la **STS 3096/2015, de 7 de julio** dice que *“por lo que respecta a la indemnización por el demérito de la parte de la finca no expropiada, debe tomarse en consideración que la indemnización por expropiación parcial trata de*

---

<sup>6</sup> HUMERO MARTÍN, A. E., y PORTO REY, E., *Estudio integral de las valoraciones expropiatorias. (Análisis pormenorizado del ordenamiento jurídico, jurisprudencia y casos prácticos)*, Editorial Dykinson, 17-06-2019, Madrid, España, Pág.137.

<sup>7</sup> La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico, Eloy Colom Piazuelo, CEDECS, 1998, pág. 243-244.

*compensar el demérito que sufre la parte no expropiada en relación con el aprovechamiento que ostentaba la finca antes de la división, dado que lo que se trata de indemnizar por tal concepto no es la privación del suelo, el cual no se expropia, sino los perjuicios en la utilización o productividad del resto de la finca no expropiada en relación con su aprovechamiento agrícola. Es por ello que la indemnización en los casos de expropiación parcial, fuera de los supuestos contemplados en el art. 23 de la LEF, puede venir motivada por diferentes circunstancias, tales como los perjuicios que la propia división de la finca genere, el demérito en el resto de la finca no expropiada o los perjuicios en la utilización o aprovechamiento del resto de la finca no expropiada. Pero esta indemnización no es automática, los daños y perjuicios han de ser acreditados”.*

Con mayor precisión en la **STS de 2 de Junio de 2014** remite a la **STS de 22 de marzo de 1993** y la **STS 26 de marzo de 1994** para dictaminar que *"cuando la expropiación parcial de una finca produce un demérito en la porción restante, tal depreciación, como consecuencia directa de la expropiación, debe ser compensada adecuadamente, mediante una indemnización proporcionada al perjuicio real.... Se trata, en definitiva, de un problema relacionado con la prueba de tales perjuicios que se reclaman”*. Aquí, la principal característica es que los daños y perjuicios se deben acreditar, pues de lo contrario no se pueden reclamar.

La **indemnización por daños y perjuicios** hace referencia, según el artículo 156.3.c) del RD 1955/2000, a los derivados de la ocupación temporal de terrenos para depósitos de materiales o para el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y explotación de la línea.

En relación a los daños y perjuicios y su posible conexión con el premio de afección, la **STS 2311/2017, de 6 de junio** separa el premio de afección y de los daños y perjuicios. Por consiguiente, dicha sentencia afirma que *“Respecto de la extensión del premio de afección, el artículo 47 LEF dispone que "en todos los casos de expropiación, se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores, un 5 por 100 como premio de afección", habiendo precisado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que "el premio de afección se refiere al valor de la cosa expropiada y no a otros conceptos como pueden ser la indemnización de posibles perjuicios, pues las indemnizaciones motivadas por los daños y perjuicios (cosecha, alberca y pérdida de instalaciones de riego) quedan excluidas del premio de afección por ser improcedente su aplicación sobre tales*

*conceptos indemnizables, ya que el premio de afección se calcula sobre el importe de las partidas indemnizatorias que responden a la privación de bienes y derechos del mismo, no sobre aquellas que constituyen indemnización de perjuicios derivados de la expropiación. De ahí que el premio de afección haya de aplicarse además de a la expropiación del suelo solo respecto de la valoración de la servidumbre de paso aérea y no sobre los demás conceptos sobre los que se ha valorado el justiprecio*". En esta sentencia también se puede apreciar que esta es la línea que ha seguido el Alto Tribunal respecto a esta separación en las **sentencias de 12 de noviembre de 1947, 23 de noviembre de 1956 y 15 de julio de 1986**; entre otras. Por ello, en este caso se observa una clara línea de actuación jurídica que permite separar ambas figuras.

Otras formas de obtener una indemnización se da en las situaciones de modificación de la servidumbre a instancia del dueño del predio sirviente y la variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración.

La primera, se encuentra regulada en el artículo 153.7 del RD 1955/2000, el cual dice que *"si la resolución es favorable a la variación, para llevar a efecto la misma, el solicitante deberá abonar previamente al titular de la línea el importe total del presupuesto a que se hace referencia en el apartado anterior"*. Es decir, dicho titular cuando la servidumbre de paso este constituida, puede solicitar el cambio del trazado de la línea, siempre y cuando no existan dificultades técnicas.

La segunda, se regula en el artículo 154.3 del RD 1955/2000, en el cual dice que *"la Administración competente sobre el proyecto o plan del que derive la necesidad de variación de la línea, una vez que éste haya sido aprobado, abonará al titular de la línea el coste de la variante y los perjuicios ocasionados"*.

Finalmente, hay que destacar que el TRLSRU señala en su artículo 34.1.b) que *"las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive"*.



## IX. Conclusiones.

### Primera.

La expropiación en España se reconoce en la Constitución Española en su artículo 33, a través de la utilidad pública que actúa como límite al derecho de la propiedad privada, y en su artículo 149, en el cual se determina la competencia del Estado sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, es decir, se determina la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación y sobre la expropiación de instalaciones, así como la competencia de las Comunidades Autónomas sobre la expropiación de instalaciones.

Tras su delimitación constitucional, la expropiación cuenta con una normativa que desarrolla estos preceptos constitucionales como es la Ley de Expropiación Forzosa.

No obstante, teniendo en cuenta el tema tratado en el presente trabajo, existe una legislación especial en expropiación como es la expropiación en el sector eléctrico, que cuenta con una normativa propia que regula los aspectos relativos a la determinación del objeto, la declaración de utilidad pública, el procedimiento y la valoración, entre otros. Esta normativa sectorial se inició en 1966 con la Ley de expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, que fue derogada por la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional de 1994. la cual a su vez quedó derogada por la vigente Ley del Sector Eléctrico de 2013 y con su RD 1955/2000 que actúa como su reglamento de desarrollo. Esto muestra el desarrollo normativo en este sector y lo relevante que ha sido desde hace años.

### Segunda.

El objeto relevante en este tipo de expropiaciones es, como ya se ha mencionado en el presente trabajo, la servidumbre de paso eléctrica, ya sea aérea o subterránea, con su naturaleza y contenido propio de este sector.

No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, existen unas limitaciones inherentes a la propia servidumbre en los que destaca el derecho de reversión, entre otros. De estas formas, la legislación sectorial restringe la potestad expropiatoria.

### Tercera.

El procedimiento expropiatorio es muy garantista para todas las partes implicadas, ya que, tras la declaración de utilidad pública implícita en la propia ley, existe un trámite de información pública, una fase de alegaciones y un periodo de información a otras Administraciones. Todo ello, dota de seguridad jurídica y publicidad a todo el procedimiento. Sin embargo, en todo tipo de expropiación se dan este tipo de garantías.

### Cuarta.

Una vez finalizado todos los trámites del procedimiento, se procede a la valoración del bien; y es aquí, en este valor económico del bien expropiado, donde reside su principal problemática al producirse una mayor litigiosidad por parte del expropiado, el cual frente a la privación de su propio bien, busca una justa indemnización del expropiante, que además tiene reconocida por la Constitución. Esto da lugar a que, en muchas ocasiones sea un Tribunal el que corrija el justo precio del bien expropiado.

En cuanto al valor económico del bien existe una jurisprudencia consolidada sobre la fijación de los porcentajes indemnizatorios.

### Quinta.

Como se ha mencionado en el trabajo, existe un ineludible conflicto competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña debido a que la Constitución y el Estatuto de Autonomía se atribuyen como propias las competencias en materia de expropiación forzosa en el sector eléctrico. Ante este contexto, el Tribunal Constitucional declara que el Estatuto de Autonomía no puede entrar en dicho título competencial.

Así, se pueden encontrar otros Estatutos de Autonomía, como puede ser el de Aragón, Castilla y León, Canarias y Andalucía, los cuales no suponen una contradicción con el título competencial recogido en la Constitución.

### Sexta.

La expropiación en este sector es importante para la actividad económica, ya sea en el ámbito doméstico, en el profesional y en el industrial. A ello, se le suma su relevancia económica, donde este sector se caracteriza por la presencia de empresas que cotizan en bolsa y por su impacto económico en el territorio nacional, y su relevancia presupuestaria, pues cada año la inversión aumenta progresivamente en mejorar y

extender la red eléctrica por todo el territorio, necesitando así, hacer frente a los costes de expropiación que ello implica.

Finalmente, el incremento de nuevas fuentes de energía renovables, sumadas a las ya habituales, dará lugar a un aumento de la construcción de infraestructuras para generar, transportar, distribuir y gestionar, económica y técnicamente, energía eléctrica.

#### X. Bibliografía.

ALVAREZ-VALDÉS Y VALDES, MANUEL, “La ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional vista por un jurista”, *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 1996, Ref. D-93, tomo 2, Editorial LA LEY.

ARROYO GARCÍA, J., *Las limitaciones y servidumbres públicas en el derecho administrativo español*, Pamplona (Navarra), Aranzadi, 1982.

COLOM PIAZUELO, E., *La Expropiación Forzosa en el Sector Eléctrico*, CEDECS, Zaragoza, 1998.

GÓMEZ CALERO, JUAN, “La servidumbre de paso de energía eléctrica”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Reus S.A., 1967.

HUMERO MARTÍN, A. E., y PORTO REY, E., *Estudio integral de las valoraciones expropiatorias. (Análisis pormenorizado del ordenamiento jurídico, jurisprudencia y casos prácticos)*, Editorial Dykinson, 17-06-2019, Madrid, España.

<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=33&tipo=2>  
10 de octubre de 2019.

XI. Anexos.

Anexo Jurisprudencial.

<b>STC 32/2016, de 18 de febrero 2016</b>	BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2016. ECLI:ES:TC:2016:32
<b>STS de 22 de marzo de 1993</b>	Recurso apelación Núm. 4876/90
<b>STS de 26 de marzo de 1994</b>	Recurso apelación Núm. 2284/91
<b>STS 2124/2009, de 21 de abril</b>	ECLI: ES:TS:2009:2124 Nº de Recurso: 1607/2005 Id Cendoj: 28079130062009100300
<b>STS de 9 de julio de 2012</b>	Recurso Casación 4632/2009 Vlex 395384782
<b>STS 530/2013, de 12 de febrero</b>	ECLI: ES:TS:2013:530 Id Cendoj: 28079130062013100074
<b>STS de 2 de junio de 2014</b>	Número Recurso: 4092/2011 Vlex 516231330
<b>STS 3096/2015, de 7 de julio</b>	Núm. Ecli: ES:TS:2015:3096 Núm. Recurso: 1584/2013 Id Cendoj: 28079130062015100418
<b>STS 753/2016, de 25 de febrero</b>	ECLI: ES:TS:2016:753 Nº de Recurso: 3055/2013 Id Cendoj: 28079130032016100068
<b>STS 1367/2016, de 1 de abril</b>	ECLI: ES:TS:2016:1367 Nº de Recurso: 318/2014 Id Cendoj: 28079130032016100115

<b>STS 3578/2016, de 14 de julio</b>	ECLI:ES:TS:2016:3578 Núm. Resolución: 1783/2016 Núm. Recurso: 937/2014 Núm. Cendoj: 28079130032016100304
<b>STS 2722/2016, de 21 de Diciembre</b>	Nº de recurso: 500/2013 Vlex 657240777
<b>STS 2311/2017, de 6 de junio</b>	ECLI: ES:TS:2017:2311 Nº de Recurso: 3409/2015 Nº de Resolución: 1000/2017 Id Cendoj: 28079130052017100243
<b>STS 795/2017, de 3 de marzo</b>	ECLI: ES:TS:2017:795 Nº de Recurso: 2702/2015 Nº de Resolución: 375/2017 Id Cendoj: 28079130052017100093
<b>STS 472/2017, de 21 de marzo</b>	Nº de Recurso 1266/2016 Vlex 676591725
<b>STS 1085/2017, de 21 de marzo</b>	ECLI: ES:TS:2017:1085 Nº de Recurso: 1266/2016 Nº de Resolución: 472/2017 Id Cendoj: 28079130022017100110
<b>STS 1000/2017, de 6 de junio</b>	Núm. Recurso: 3409/2015 Vlex 683264533